pedirles cuentas a ellos. Pero como sus adversarios hacen lo mismo, se produce un fuego cruzado de denuncias y descalificaciones mutuas que se convierte en un permanente diálogo de sordos. El resultado es una deslegitimación generalizada en la que nadie acepta rendir cuentas ante los demás porque ninguno considera dignos de pedírselas a los otros. Una tragicomedia barroca de capa y espada digna de Calderón o Tirso de Molina, donde matasietes y espadachines tratan de deshonrarse recíprocamente para salvar su fachada de hombres de honor. Así se cierra la cuadratura de este círculo vicioso en que está encerrada la clase política española, quedando todas las partes deslegitimadas por igual.

Este juego de espejos deformantes en que todos se hacen las víctimas inocentes ofendidas en su honrosa dignidad, mientras acusan airados a sus rivales de cometer con deslealtad los peores atentados morales, tiene que terminar. Ya basta de ese diálogo de sordos en el que todos dicen lo mismo: «yo no he sido», para añadir a continuación, «y tú más». Y se tiene que acabar porque su histriónica representación ya no puede seguir engañando a nadie más, por mucho que vociferen y se desafíen en escena con chulería. Hoy sabemos que todos son, en mayor o menor medida, igualmente culpables de atentar contra sus adversarios —aunque siempre haya grados diversos de ruindad o cinismo, como podrá reconocer cualquier observador imparcial—, y por tanto no se puede prestar crédito alguno a sus hipócritas protestas de inocencia. Pues bien, ya es hora de que también ellos lo reconozcan así en público.

GIL CALVO, Enrique (2007) La lucha política a la española. Ed Taurus Madrid.

Capítulo 5

Agendas a debate
Retórica política y estrategia oculta

Ahora ya podemos regresar a la actualidad, para investigar mejor la actual estrategia de confrontación de las fuerzas políticas en liza. Podría pensarse, a la luz de lo escrito hasta aquí, que su único programa es paranoicamente destructivo: no respetéis al enemigo, que os engaña y no se lo merece, denunciadle y votad contra él, que nos arrastra a la perdición, apartadle del poder, castigadle por indigno. Pero en realidad tampoco es eso, o por lo menos no es sólo así, pues miradas las cosas con un poco más de atención, en el fondo hay algo más, y quizá bastante más. En su locura debe de haber un método, tras su manía persecutoria se adivina un cálculo interesado, bajo la superficie del ruido, el odio y la furia subyace una cuidadosa y deliberada planificación.

En este capítulo se van a analizar las argumentaciones ideológicas alegadas por los tres vértices del escenario político actual (Gobierno socialista, oposición popular y bisagra territorial), tratando de averiguar cuáles son sus intenciones ocultas. Y para ello se parte de la hipótesis de que, por ruidosas y airadas que parezcan, sus razones no son más que trucos retóricos: meros recursos tácticos que se esgrimen por su probada eficacia para alcanzar unos objetivos prefijados.

O sea, puro teatro: una representación melodramática puesta en escena para interesar e impresionar al público espectador, a fin de persuadirle provocando una catarsis capaz de modificar el sentido de su voto. Por lo tanto, y tal como ocurre en

toda representación teatral, cabe distinguir dos planos completamente distintos. De un lado, lo que se manifiesta ante el telón (el proscenio o primer plano del escenario) de forma visible ante el público: el drama escénico, casi siempre histriónico y truculento, en el que los actores políticos se hacen las víctimas, claman venganza y se ofrecen como salvadores. Y al otro lado del telón, lo que se cuece en el *backstage* —la trastienda, entre bastidores, tras las bambalinas—, de forma opaca y a espaldas del público: la trama oculta de la obra, entendida como premeditada fabricación de un libreto ficticio diseñado a propósito para afectar sesgadamente a la actitud del votante en beneficio de los intereses electorales de cada parte.

¿Cómo explicar que haya tanta distancia, y casi siempre tanta contradicción, entre los prosaicos intereses políticos y su truculenta puesta en escena? ¿A qué se debe semejante duplicidad? ¿Por qué se representa una ficción a menudo falaz en lugar de decir la verdad, expresando la posición de cada uno respecto a los demás? ¿Qué necesidad hay de ocultar las verdaderas intenciones montando un número truculento? ¿Tan inconfesables o ilegítimos resultan los propios intereses que para taparlos hay que inventarse un *thriller*: un cuento lleno de ruido y de furia para que parezca una peregrina historia de buenos y malos?

Dos tipos de razones explican esta compulsión por simular una confrontación apasionante mientras se disimula el frío cálculo estratégico. La primera razón procede de lo que podríamos llamar técnica teatral, pues para interesar al público hace falta sobreactuar: calzarse coturnos, revestirse con máscaras, declamar un papel engolando la voz. De no hacerse así, el público se aburre, bosteza y se va de la platea. Tanto más para un público como el español, que tiende a ser pasivo, escéptico y absentista, pues sólo se digna a movilizarse ante crisis políticas o acontecimientos trágicos: el espíritu de Ermua, la catástrofe del *Prestige*, el «No a la guerra», el 11-M, etcétera. Por eso, para galvanizar la indolencia del público, hay que poner en escena una auténtica tragedia, que si se representa con propiedad podría conseguir

la emergencia de la catarsis. Lo que se traduce en clave política por un vuelco electoral.

Y la otra razón se deriva de la naturaleza última de la democracia representativa. Si los actores políticos confesaran en público cuáles son sus auténticos intereses partidistas, los ciudadanos se sentirían defraudados, al ver cómo sus representantes se desinteresan de sus verdaderos problemas para dedicarse sólo a luchar por el poder. En consecuencia, los políticos sinceros perderían las elecciones que suelen ganar los profesionales que saben fingir con más verosimilitud y visos de autenticidad. De ahí que todos mientan más que hablen, y jamás expresen en público su verdadero análisis de la realidad. Aunque las encuestas les castiguen, ellos afirman que están convencidos de ganar. Y cuando pierden las elecciones, se las apañan para sostener lo contrario. El caso es salvar la cara, mantener el tipo y llevar la cabeza bien alta. O sea ocultar su auténtica posición y sustituirla por una pantalla verbal que blinda sus puntos débiles y refuerza sus líneas de defensa, para emprender un ataque con intención de distraer desplegado con segundas intenciones.

Pero el problema no reside en esta duplicidad entre lo público (visible) y lo oculto (privado), consustancial a cualquier representación profesional, sino en algo más grave. Es el patente olvido de una gran parte de los problemas de los ciudadanos, que quedan excluidos y expulsados fuera de la esfera de debate. Se trata de la manipulación de la agenda a la que me referí en un capítulo anterior, consistente —como señala Lukes— en alterar y distorsionar el orden de prioridades de los problemas por resolver. Una manipulación que se produce cuando se silencian y se dejan de atender los problemas relevantes, cuando se otorga innecesaria prioridad a problemas menores o cuando se inventan falsos problemas elevándolos al primer rango del interés público. Con ello, el debate sobre los intereses reales de los ciudadanos es suplantado por el debate entre los intereses gremiales de sus representantes políticos.

Pues bien, utilizando estas técnicas de distorsión de la agenda, cada fuerza política selecciona su propio orden de priorida-

des en la lista de cuestiones por resolver, anteponiendo con sectarismo sus problemas electorales a los problemas sociales que son de interés general. Así surgen las tres clases de agendas políticas a las que se dedicará este capítulo: la *agenda excluida* por todos, que se mantiene fuera del debate público porque no puede ser instrumentada al servicio de los intereses partidistas en conflicto; la *agenda oculta* privativa de cada parte, cuya estructura de prioridades guía el diseño de su estrategia política y electoral; y la *agenda retórica* esgrimida por cada uno contra todos los demás, cuya confrontación en la escena mediática constituye finalmente el contenido manifiesto que se debate en la esfera pública.

La agenda excluida

A la hora de seleccionar las cuestiones políticas sobre cuyo tratamiento van a basar su estrategia, las fuerzas políticas tienden a menospreciar los problemas sociales que más directa e inmediatamente afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos: vivienda, sanidad, educación, condiciones de trabajo, integración de los inmigrantes, desigualdad económica, exclusión social, emancipación de los jóvenes, discriminación laboral femenina, derecho a formar familia, jubilación, envejecimiento, degradación ambiental, privatización del espacio urbano, etcétera. Un conjunto de servicios, programas y recursos infraestructurales de los que depende el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la ciudadanía, que no se pueden dejar librados al injusto albur de las fuerzas de mercado. De ahí que para su justa garantía y eficaz provisión haga falta la intervención de los poderes públicos, tanto a escala estatal como local. Es lo que se puede llamar *micropolítica*, en contraste con los grandes debates mediáticos que se refieren a la macropolítica nacional.

Pues bien, este contencioso micropolítico tiende a quedar relegado y casi excluido de la agenda española de debate entre las fuerzas políticas. Por supuesto, todos estos problemas figu-

ran en sus programas electorales, en las partidas presupuestarias, en los organigramas administrativos y, muchas veces también, son objeto de reformas legislativas. Pero apenas se discute de ellos, o se debate mucho menos de lo que sería necesario, pues nuestros representantes están demasiado entretenidos enfrentándose con gran crispación por otras cuestiones aparentemente más importantes, o por lo menos más interesantes para ellos.

¿A qué se debe esta exclusión, por relativa que sea? No puede decirse que sea a su falta de atractivo mediático, pues cuando en alguna ocasión surge alguna «ocurrencia» en este sentido, como el cheque natal graciosamente otorgado por Zapatero, enseguida corren ríos de tinta y arrecian las tempestades. No, la razón principal es que tales temas de micropolítica no pueden ser utilizados para debatir entre los distintos partidos porque todos ellos tienen las mismas posiciones —o parecidas— al respecto. Y cuando a alguna de las partes se le ocurre una innovación, sus competidores enseguida la emulan plagiándola sin complejos. Es lo mismo que sucede con la política macroeconómica, pues todos los Gobiernos de derecha o izquierda, estatales o locales, utilizan el mismo *mix* de medidas neoliberales y socialdemócratas, siguiendo una tercera vía al estilo de Tony Blair que sólo se diferencia políticamente por los signos estéticos que identifican su imagen de marca.

En suma, el eje derecha-izquierda ha desaparecido casi por completo de la confrontación política y electoral. El mejor ejemplo son los recortes fiscales, ayer privativos de los liberales y hoy secundados por los socialistas. Y cuando algún gobernante opta por acentuar las políticas sociales, como hace hoy Zapatero, sus contrincantes no tienen apenas nada que oponer. Así lo demuestra el hecho de que, a pesar de toda la crispación, el PP se sumase a la unánime aprobación de una ley como la de dependencia, que contradice abiertamente los presupuestos ideológicos de la derecha liberal, partidaria del Estado mínimo y del recorte de las políticas universales de protección social. ¿Cómo explicar que la diferenciación entre izquierda y dere-

cha ya no sea esgrimida en el contenido de la confrontación política?

Las razones son varias. Ante todo se habla del fin de las ideologías, causa última de la convergencia macroeconómica hacia el centrismo de tercera vía a lo Blair. Y en efecto, la economía postindustrial del empleo flexible y la movilidad social ha producido un desclasamiento generalizado, por lo que casi todos los ciudadanos se sienten hoy pertenecientes a una difusa, fragmentada y apolítica clase media, sin claras preferencias ideológicas y electoralmente volátil o abstencionista. Es verdad que los grandes partidos siguen conservando un suelo seguro de probada fidelidad electoral. Pero es que hoy las elecciones se deciden por el imprevisible comportamiento de unas franjas cada vez más numerosas de ciudadanos flotantes, políticamente no alineados: jóvenes sin comprometer hasta la treintena, adultos desarraigados por la precariedad laboral y familiar, una nueva clase del sector servicios resultado de la sociedad de consumo que ha sustituido la identidad de clase por los estilos de vida...

De ahí que a ningún partido de Gobierno le convenga extremar su radicalismo ideológico, pues arrostra el riesgo de perder las elecciones. Los neoconservadores del PP se radicalizan en cuestiones internacionales (guerra de Irak), patrióticas (terrorismo, cuestión territorial, memoria histórica), religiosas (educación para la ciudadanía) y morales (matrimonio homosexual), pero tienen buen cuidado de no tocar la política social. Y lo mismo hace Zapatero, que parece radical en cuestiones pacifistas (retirada de Irak), autonómicas *(Estatut)*, cívicas (matrimonio *gay*) y morales (memoria histórica) pero cuya ortodoxia neoliberal llega al extremo de presumir de recortes fiscales y superávit presupuestario.

Lo cual demuestra que ambos grandes partidos juegan con dos barajas. Compiten entre sí para extremar sus diferencias en cuestiones exclusivamente políticas y morales mientras que, al mismo tiempo, cooperan tácitamente para seguir y desarrollar —de Solbes a Rato y de Rato a Solbes— idéntica política socioeconómica: impuestos, vivienda, pensiones, servicios públicos, etcétera. ¿Cómo se entiende esta paradoja sólo aparente? Una hipótesis plausible es que semejante ambivalencia ha sido adoptada por nuestra clase política para adaptarse a una sociedad civil, como la española, que también puede ser muy ambivalente.

En efecto, desde el punto de vista ideológico, nuestra ciudadanía se define a sí misma de modo muy estable como claramente situada en el centro izquierda —con una puntuación media de 4,5 en una escala del 1 al 10 (siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha)—. Pero desde el punto de vista de los intereses materiales, esto no resulta nada claro, pudiendo sospecharse el rampante ascenso de una clara derechización social. Hay ciertos indicadores, como la masiva preferencia por la vivienda en propiedad (90 por ciento) frente al alquiler, la escasa atención a la formación profesional en favor de la universitaria, y el gran crecimiento de la enseñanza privada o concertada —a pesar de la muy escasa práctica religiosa— en detrimento de la pública, que revelan el predominio de una mentalidad conservadora de propietarios y nuevos ricos —quizá heredera del franquismo sociológico— con clara vocación de ascenso social. Todo sea por trepar, renunciando a las raíces y a los orígenes de clase.

Como solían decir los franceses, una sociedad que tiene su corazón en la izquierda pero su cabeza en la derecha. O que se declara verbalmente progresista —lo que demuestra con esporádicas manifestaciones contra la guerra— pero se comporta, en la práctica, de manera conformista. Y semejante ambivalencia ideológica debe ser relacionada con la *americanización* de nuestra sociedad que señalé al comienzo de este libro. Gracias al ingreso de millones de inmigrantes por la base de la pirámide social, que forman la nueva clase del sector servicios socialmente excluida, el resto de clases sociales experimenta, por comparación, un aparente efecto de ascenso social relativo —facilitado además por un crecimiento de la renta superior al promedio europeo—. Una sociedad de nuevos ricos que también comienza a emular su desideologización a la americana, pues

sabido es que por eso en Estados Unidos no hay espacio para el socialismo.

El ejemplo más llamativo de esta derechización es la conurbación madrileña, de fuerte mayoría funcionarial y asalariada, que tras ser antaño bastión socialista se ha convertido hoy en la reserva electoral del PP. Pero esta esquizofrenia ciudadana genera también una fuerte propensión hacia la volatilidad electoral, con frecuentes y bruscos tránsitos de izquierda a derecha (1996) o de derecha a izquierda (2004). Y escarmentados por las inesperadas derrotas sufridas, nuestros dos grandes partidos han aprendido a adaptarse programando sus ofertas políticas con grandes dosis de ambigüedad, esperando contentar por igual a las dos almas de los españoles, la progresista y la conformista.

La Fundación Alternativas —de afinidad socialista— ha elaborado un informe dirigido por Joaquín Estefanía que identifica la estrategia adoptada por la oposición del PP en su enfrentamiento con el Gobierno para adaptarse a esta ambivalencia ciudadana. Así, respecto a la política social, el PP, lejos de oponerse, ha aprobado por consenso todas las políticas progresistas propuestas por el Gobierno en materia de derechos civiles y sociales —con excepción del matrimonio homosexual—: Ley de Dependencia, Ley de Violencia de Género, etcétera. Ni siquiera se ha hecho excesivo hincapié en el problema de la inmigración y la inseguridad ciudadana —clásicos temas sociales de la derecha—, por temor a irritar a sus bases electorales ideológicamente progresistas. Es verdad que la educación ha constituido una excepción a esta regla, pues el PP ha defendido con intransigencia los intereses de la patronal religiosa. Pero ya he señalado antes la peculiar actitud de la clase media española a este respecto, pues aunque ya esté secularizada prefiere enviar a sus hijos a colegios clasistas y étnicamente *limpios,* como son los religiosos católicos.

El informe citado subraya que el PP, en cambio, ha concentrado toda su labor de oposición en aquellas políticas *transversales* que se distribuyen por igual entre la derecha conservadora y la izquierda progresista —o que dividen por igual a las dos

sensibilidades ideológicas—: lucha contra el terrorismo y cuestión autonómica. Es aquí, en los problemas interclasistas que cruzan la frontera ideológica entre derecha e izquierda, donde el PP ha invertido todos sus esfuerzos para desgastar y erosionar al Gobierno, atacándole sin complejos ni escrúpulos con la esperanza de acabar con él. Y aunque no llegue a conseguirlo, al menos intenta socavar el apoyo que prestan al Gobierno sus bases sociales y buscar su abstención, tratando así de pescar en el caladero de votos del PSOE a fin de aprovechar la volatilidad potencial en beneficio propio.

Todo esto es verdad. Pero lo que no reconoce el informe de la fundación socialista es que el Gobierno hace exactamente lo mismo, siguiendo una estrategia semejante que también genera el efecto de desdibujar la frontera entre derecha e izquierda para centrarse en políticas transversales, potencialmente tentadoras para los votantes indecisos o volátiles. Y de hecho, los dos temas estrella que han protagonizado la confrontación política durante esta primera legislatura de Zapatero —el problema terrorista y la cuestión territorial— no fueron lanzados por iniciativa de la oposición conservadora, sino del Gobierno socialista.

Fue Zapatero quien propuso de *motu proprio,* al margen de su programa electoral, iniciar un proceso de diálogo con la izquierda *abertzale* para poner fin a la violencia: un tema transversal que no fue retomado por la oposición hasta más tarde, para devolver la pelota contra el Gobierno criticando el llamado proceso de paz, al que definió acusadoramente como traición a las víctimas por su rendición ante ETA. Y fue también Zapatero quien tomó la iniciativa de iniciar un proceso de reformas autonómicas para incrementar el autogobierno territorial, proceso al que denominó la *España plural* y cuyo buque insignia fue el *Estatut* catalán: otro tema transversal reciclado más adelante por la oposición para devolvérselo al Gobierno con la acusación de «España se rompe».

¿Qué necesidad tenía Zapatero de lanzar estas iniciativas transversales, destinadas a monopolizar con su protagonismo

la legislatura en detrimento del programa social del Gobierno? Luego veremos que también podían servir a otros objetivos políticos. Pero aquí se debe reconocer que ante todo poseían un fin claramente electoral, destinado a buscar la aprobación de los votantes procedentes de todas las clases sociales. Una esperanza que luego se vio frustrada porque ambas cuestiones terminaron con un sonoro fracaso, pasándole a Zapatero una abultada factura en términos de aprobación popular —sobre todo en el caso del *Estatut*—. Pero lo peor es que tan arriesgadas apuestas taparon la política social que tendría que haber centrado su programa progresista de Gobierno. Así se desdibujaba el eje ideológico derecha-izquierda, teóricamente favorable al Partido Socialista, en beneficio del PP.

¿Por qué no ha centrado Zapatero su estrategia de gobierno en las políticas sociales más favorables a los intereses de sus electores? ¿Por qué se ha distraído tapándolas en beneficio de las políticas transversales? Sin duda, esta pregunta se inscribe en una cuestión más amplia, que es la crisis ideológica de la izquierda. Una crisis que afecta tanto a la izquierda española en particular como a la europea en general. Sencillamente, hoy la izquierda ya no dispone de un verdadero programa socialista o socialdemócrata de gobierno, dada su claudicante rendición ante las triunfantes políticas neoliberales de ajuste presupuestario, flexibilidad laboral, moderación salarial y recorte de impuestos directos.

Por eso las políticas presuntamente sociales que ha emprendido Zapatero han sido unas políticas desestructuradas y de bajo coste *(low cost)*, que se han improvisado apresuradamente al final de la legislatura con parches al problema de la vivienda y burdos cheques natales para tapar el fracaso de las políticas transversales (proceso de paz y autogobierno territorial). Se trata de un chapucero apaño vestido de política social que sólo se ha logrado financiar a última hora gracias al superávit sobrante del *boom* de la construcción. Pero un apaño tan precario que no contribuye a paliar el bloqueo de la emancipación juvenil y femenina que impide hoy ejercer el derecho a formar familia.

Una agenda, esta última, que ha quedado excluida del debate público español junto con muchas otras.

Es verdad que se trata de una exclusión sólo relativa, pues al hacer balance de su legislatura, el Gobierno de Zapatero puede presumir de política social gracias a la Ley de Dependencia, destinada a fundar el cuarto pilar —la red de servicios sociales— del Estado de bienestar. Pero incluso en este tema estrella, anunciado a bombo y platillo por el programa electoral socialista y largamente preparado por un Libro Blanco elaborado por el IMSERSO, cabe oponer serias objeciones.

Ante todo no ha hecho más que inaugurarse, pues su aplicación se aplaza hacia el futuro. Después carece de suficiente financiación, debido a que las asignaciones presupuestarias son ridículas en comparación con las necesidades. Por eso todavía no se ha iniciado el desarrollo de una verdadera red de servicios sociales, dotada de suficientes recursos materiales y humanos —se habla de 400 mil empleos previstos— para atender a los dependientes. Y en su ausencia, se ha preferido subvencionar a las cuidadoras familiares: una medida inequívocamente conservadora y regresiva, de protección al ama de casa, que está en clara contradicción con lo que debería ser una ley progresista, incentivadora de la actividad femenina extradoméstica. En definitiva, una ley transversal e interclasista, que intenta contentar tanto a la derecha como a la izquierda sin satisfacer ni a unos ni a otros. Eso por no hablar del desbarajuste autonómico que está frenando su coordinación a escala estatal.

Y lo que acaba de verse con la Ley de Dependencia también ocurre con las demás políticas sociales publicitadas por el Gobierno. Por ejemplo, en materia de vivienda, donde se ha permitido por omisión que sigan revalorizándose hasta la estratosfera los patrimonios inmobiliarios, con el consiguiente efecto perverso de que la emancipación juvenil y femenina quede todavía más bloqueada. Es verdad que se intentó fomentar el alquiler constituyendo una agencia estatal. Pero el fracaso fue tan estrepitoso que hubo que cambiar a la ministra del ramo. Y la nueva responsable sólo ha hecho a última hora más de lo

mismo, para ocupar los titulares de prensa con ofertas preelectorales. Todo ello, además, sin tratar de corregir el actual desequilibrio hacia la vivienda en propiedad con un choque de oferta de vivienda social en alquiler, que es lo que debería hacer una política progresista. Pues la diferencia entre derecha e izquierda en materia de vivienda es precisamente el fomento de la propiedad —como hicieron Mussolini y Franco, como han hecho Thatcher y Sarkozy—, que favorece a la clase social de los pequeños propietarios (capitalismo popular), frente al fomento del alquiler, que favorece a los trabajadores por cuenta ajena (movilidad laboral).

Con lo que se demuestra que la política de vivienda de Zapatero también pretende ser transversal e interclasista, siguiendo el modelo de tercera vía. Igual que ocurre con sus medidas de fomento de la natalidad, basadas en subvenciones universales —el cheque natal anunciado por Zapatero durante el último debate sobre el estado de la nación de su primera legislatura no es otra cosa que un regalo otorgado desde arriba—. Dichas medidas se inscriben en la tradición conservadora y contradicen abiertamente lo que debería ser una política progresista de protección al derecho a formar familia —y a deshacerla—, fundada en una sólida red de escuelas infantiles y guarderías públicas. Es verdad que también esto último se ha prometido a última hora por exigencia de la izquierda ecologista (IU-ICV), que demanda inútilmente del Gobierno un auténtico giro social. Pero no parece suficiente ni resulta creíble, y viene sólo a confirmar su política transversal de contentar a propios y extraños.

Así podríamos seguir repasando las demás políticas etiquetadas por Zapatero como *ciudadanistas*, que se centran especialmente en el reforzamiento y la protección de los derechos ciudadanos menos reconocidos o más discriminados: violencia machista, matrimonio homosexual, igualdad de género, regularización de inmigrantes, etcétera. Todo lo cual está muy bien y merece total aprobación, como no podía ser menos. Además presentan la ventaja, desde la perspectiva neoliberal, de que

cuestan muy poco dinero, por lo que ahorran impuestos. Y como medida de propaganda mediática tampoco están nada mal. Pero no son medidas de política social, polarizadas en el eje derecha-izquierda, sino que son medidas transversales e interclasistas, que benefician tanto a las clases propietarias y profesionales como a las funcionariales y asalariadas.

Pura convergencia transversal de tercera vía blairista. Pero mientras tanto prosigue rampante la exclusión social, y los intereses materiales de los ciudadanos con bajo poder adquisitivo quedan sin proteger, librados por omisión a la suerte del mercado a resultas de un extraño consenso tácito entre Gobierno y oposición. Es la agenda silenciada que queda excluida del debate público, para dejar hueco a otros debates mucho menos necesarios pero que resultan más apasionantes por su elevada carga de morbo mediático. Pues introducir temas transversales ideológicamente neutrales permite desactivar el eje de conflicto izquierda-derecha para sustituirlo por el eje de conflicto Gobierno-oposición, centrado exclusivamente en la desnuda lucha por el poder.

Pero los intereses materiales de los ciudadanos, que deberían dividir a la derecha de la izquierda, no son el único problema social que resulta excluido de la agenda de debate. Además de esa agenda micropolítica, hay otra agenda macropolítica que también resulta silenciada y excluida por Gobierno y oposición de común acuerdo. Aquí aparecen tres grandes grupos de problemas institucionales a los que ya he aludido antes. Me refiero de una parte a los fenómenos anómicos, que conforman lo que podemos llamar el lado oscuro de la política económica: evasión fiscal, economía sumergida, blanqueo de dinero y, sobre todo, el gigantesco iceberg de la corrupción política (financiación ilegal de los partidos, tráfico de recalificaciones urbanísticas, corretaje de la especulación inmobiliaria, mercado de cohechos y prevaricaciones, etcétera). Una red de cloacas pestilentes que subyace y sustenta a la cosa pública, de la que nadie habla, nadie discute y nadie hace nada por controlar.